

## Uso de cámaras para analizar hábitos de consumo. Informe 468/2006

La consulta plantea la conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, del sistema que se describe en la misma, en cuya virtud serían captadas imágenes de personas físicas a fin de analizar su hábitos de consumo, mediante el tratamiento posterior de las imágenes relativas a su entrada o salida de una determinada empresa, cuya actividad no es descrita en la consulta.

Como cuestión previa, debe indicarse que el tratamiento al que se refiere la consulta se encuentra sometido a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999. En este sentido, debe recordarse que la Exposición de Motivos de la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de esta Agencia Española de Protección de Datos, relativa al tratamiento de datos con fines de videovigilancia señala que “las imágenes se consideran un dato de carácter personal, en virtud de lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999 y el artículo 1.4 del Real Decreto 1332/1994, de 20 de junio (RCL 1994, 1707), que considera como dato de carácter personal la información gráfica o fotográfica”.

Por otra parte, y aún cuando la finalidad del tratamiento regulado por la citada Instrucción se limita a la vigilancia a través de sistemas de cámaras y videocámaras, sus principios pueden aplicarse analógicamente al supuesto planteado, habida cuenta de la existencia de un tratamiento de imágenes a partir de los citados dispositivos.

En este sentido, debe recordarse la especial importancia que reviste en esta materia el cumplimiento de los principios de finalidad y proporcionalidad en el tratamiento de los datos. Así, la citada Exposición de Motivos recuerda que

*“En relación con la instalación de sistemas de videocámaras, será necesario ponderar los bienes jurídicos protegidos. Por tanto, toda instalación deberá respetar el principio de proporcionalidad, lo que en definitiva supone, siempre que resulte posible, adoptar otros medios menos intrusivos a la intimidad de las personas, con el fin de prevenir interferencias injustificadas en los derechos y libertades fundamentales.*

(...)

*En cuanto a la proporcionalidad, pese a ser un concepto jurídico indeterminado, la Sentencia del Tribunal Constitucional 207/1996 determina que se trata de «una exigencia común y constante para la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales, entre ellas las que supongan una injerencia en los derechos a la integridad física y a la intimidad, y más en particular de las medidas restrictivas de derechos fundamentales adoptadas en el curso*

*de un proceso penal viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad».*

*En este sentido, hemos destacado que, para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres siguientes requisitos o condiciones: «si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto)».*

*Asimismo la proporcionalidad es un elemento fundamental en todos los ámbitos en los que se instalen sistemas de videovigilancia, dado que son numerosos los supuestos en los que la vulneración del mencionado principio puede llegar a generar situaciones abusivas, tales como la instalación de sistemas de vigilancia en espacios comunes, o aseos del lugar de trabajo. Por todo ello se trata de evitar la vigilancia omnipresente, con el fin de impedir la vulnerabilidad de la persona.”*

La aplicación de estos principios resulta especialmente relevante cuando la finalidad perseguida no es la de vigilancia y seguridad, sino como en el presente caso el control de los hábitos de consumo de las personas.

Por otra parte, la Instrucción recuerda en su artículo 2 que el tratamiento de los datos consistentes en imágenes deberá encontrarse amparado por los artículos 6, y en su caso, 11 de la Ley Orgánica 15/1999. En el presente supuesto, dado que los datos no serán objeto de cesión, y no concurriendo los supuestos previstos en el artículo 6.2 de la Ley ni existiendo una norma con rango de Ley habilitante del tratamiento, será necesario que dicho tratamiento se funde en la existencia del consentimiento de los afectados.

La consulta señala que será recabado el consentimiento expreso de los afectados para la realización del tratamiento, haciéndose además constancia de los extremos requeridos por el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/199, con expresa mención de la duración del tratamiento, que sería, según se indica, de dos años.

Sin embargo, no conociéndose en detalle el tipo de actividad desarrollada por la empresa, no es posible conocer con certeza si los datos serían únicamente objeto de tratamiento respecto de los afectados que hubieran prestado su consentimiento o si dichos datos serían igualmente tratados en relación con aquellas personas que utilizasen las instalaciones

controladas sin haber sido aquellas informadas del tratamiento y sin, por supuesto, haberse obtenido el citado consentimiento.

En este sentido, el tratamiento de dichas personas se llevaría acabo incluso cuando las imágenes únicamente fueran recogidas y reproducidas en tiempo real, limitándose la consultante a tomar nota de los datos relativos a las personas que hubieran prestado el consentimiento. En este sentido, el artículo 1.1 de la Instrucción aclara en su párrafo primero que “El tratamiento objeto de esta Instrucción comprende la grabación, captación, transmisión, conservación, y almacenamiento de imágenes, incluida su reproducción o emisión en tiempo real, así como el tratamiento que resulte de los datos personales relacionados con aquéllas”.

En consecuencia, de los términos de la consulta no puede desprenderse si el tratamiento efectuado resultará conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, dado que los datos, en principio, no se referirían exclusivamente a quienes hubieran prestado su consentimiento, sino a todas las personas que puedan por cualquier motivo ser objeto de grabación, sin que todas ellas hayan prestado su consentimiento para el tratamiento de sus datos o hayan sido informadas acerca de la grabación de las imágenes.

Al propio tiempo, al no conocerse el tipo de actividad de la entidad en que se graban las imágenes no resulta posible acreditar que se cumplen los requisitos exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para considerar cumplido el principio de proporcionalidad.

Por otra parte, no se conoce el medio a través del cual el interesado podría revocar el consentimiento previamente prestado ni cómo se procedería a la cancelación de las imágenes en ese supuesto. Igualmente, no se conoce la forma en que se podrán hacer efectivos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Por último, aún no conociendo la totalidad de los extremos a los que se refiere la consulta, la conservación de los datos por un período de dos años pudiera resultar contraria a lo dispuesto en el artículo 4.5 de la Ley Orgánica 15/1999, según el cual “Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados”.

A la vista de todo ello no es posible considerar, a la vista de la información aportada en la consulta, que el tratamiento descrito en la misma resulte conforme con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999